

De la República católica al Estado laico: Iglesia, Estado y secularización en México, 1824-1914

S E R G I O F R A N C I S C O R O S A S S A L A S

El Colegio de Michoacán, A. C. / Centro de Estudios de las Tradiciones
sergiofrosas@yahoo.com.mx

Resumen: El objetivo de este trabajo es subrayar, a través de la reciente historiografía mexicana, las principales problemáticas de la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en México entre 1824 y 1914. Se muestra que durante este periodo se pasó del consenso confesional entre la jerarquía eclesiástica y los gobiernos republicanos antes de 1855 –lo que daba al clero y a la religión católica un lugar privilegiado en la sociedad– a la separación legal de la Iglesia y el Estado, a partir de la promulgación de las Leyes de Reforma en 1859, lo que trajo consigo un amplio proceso de secularización social.

Palabras claves: Relación Iglesia-Estado, Secularización, Reforma liberal, México.

Resumo: O objetivo deste trabalho é sublinhar, através da recente historiografia mexicana, as principais problemáticas da relação entre Igreja, Estado e sociedade no México entre 1824 e 1914. É demonstrado que durante este período se passou do consenso confessional entre a hierarquia eclesiástica e os governos republicanos anteriores a 1855 – o que garantia ao clero e à religião católica um lugar privilegiado na sociedade – à separação legal da Igreja do Estado, a partir da promulgação das Leis de Reforma em 1859, o que desencadeou um amplo processo de secularização social.

Palavras-chave: Relações Igreja-Estado, Secularização, Reforma liberal, México.

Abstract: The aim of this paper is to highlight, through the recent Mexican historiography, the main issues of the relationship between Church, State and Society in Mexico between 1824 and 1914. It argues that during this period Mexican society changed from a confessional consensus between the Catholic hierarchy and the Republican governments –which gave to clergy and Catholicism a central position in society– to legal separation of Church and State, due to the enactment of Reforma laws in 1859. After this legal action, Mexican society passed through an important process of social secularization.

Keywords: Church-State relations, Secularism, Liberal reform, Mexico.

El 12 de julio de 1859 el presidente liberal Benito Juárez decretó la separación entre Iglesia y Estado, la nacionalización de los bienes del clero, la supresión de cofradías y órdenes regulares y la libertad de culto en México. Expedidas al calor de la guerra de Tres Años, que enfrentó a liberales y conservadores entre 1858 y 1861, las Leyes de Reforma también crearon el Registro civil, eliminaron la injerencia de la Iglesia en los cementerios y en los actos del estado civil, reglamentaron los días festivos y prohibieron la asistencia oficial a ceremonias religiosas¹. Elevada a rango constitucional en 1874, esta legislación representó un rompimiento jurídico con la primera constitución política del país, promulgada en 1824, la cual establecía a la religión católica como oficial y prohibía el ejercicio de cualquier otra. Al mismo tiempo, las leyes reformistas produjeron una nueva relación entre Iglesia, Estado y sociedad durante la segunda mitad del siglo XIX, que pasó de la exclusión de los creyentes de la política y el espacio público en la República Restaurada (1867-1876) a una renovación católica bajo la política de conciliación del Porfiriato (1876-1911)².

Como se ve, la separación Iglesia-Estado decretada en México en 1859 fue un caso temprano y radical de desvinculación legal de ambas esferas, que tuvo profundas repercusiones en el desarrollo del campo religioso en México a lo largo del siglo XIX. El objetivo de este trabajo es subrayar, a través de la reciente historiografía mexicana, las principales problemáticas de la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en México entre 1824 y 1914. Durante este periodo se pasó del consenso confesional entre la jerarquía eclesiástica y los gobiernos republicanos antes de 1855 –lo que daba al clero y a la religión católica un lugar privilegiado en la sociedad– a la separación legal de la Iglesia y el Estado, lo que trajo consigo un amplio proceso de secularización social³. Entiendo ésta última como un proceso en el cual se dio una lenta separación de esferas entre lo secular y lo religioso, dando paso a la sociedad civil, nuevo ámbito social formado por individuos y no por corporaciones. Ello reasignó el lugar de la Iglesia (católica) en la sociedad, rompió la homogeneidad social –dada por la religión– y significó una mutación del hecho religioso al mismo tiempo que fortaleció al Estado gracias a la construcción de una legitimidad política cuya base es una soberanía creada por la voluntad de los ciudadanos⁴.

1 Este conjunto de leyes fue decretado por Juárez entre julio y agosto de 1859. CONNAUGHTON, Brian (coord.) – *México durante la guerra de Reforma*, tomo I, *Iglesia, religión y Leyes de Reforma*, Xalapa: Universidad Veracruzana, 2011.

2 Cf. ROBLES MUÑOZ, Cristóbal – *Los católicos y la revolución en México (1911-1920)*, Roma: Instituto Español de Historia Eclesiástica, 1999, p. 146-154.

3 Ambos aspectos analizados en la reciente historiografía portuguesa. Cf. LEITE, Rita Mendonça – *Representações do Protestantismo na Sociedade Portuguesa Contemporânea. Da exclusão à liberdade de culto (1852-1911)*, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, CEHR, 2009 y PINTO, Sérgio Ribeiro – *Separação Religiosa como Modernidade. Decreto-Lei de 20 de Abril de 1911 e modelos alternativos*: Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, CEHR, 2011.

4 Cf. FERREIRA, António Matos – *Um católico militante diante da Crise Nacional. Manuel Isaías Abúndio da Silva (1874-1914)*, Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, CEHR, 2007, p. 29; SERRANO, Sol – *¿Qué hacer con Dios en la República? Política y secularización en Chile (1845-1885)*, Santiago: Fondo de Cultura Económica, 2008, y DI STÉFANO, Roberto – *El púlpito y la plaza. Clero, sociedad y política de la monarquía católica a la república rosista*, Buenos Aires: Siglo XXI Editores Argentina, 2004.

Como en el resto de las sociedades católicas en el siglo XIX, la secularización no sólo fue fruto del liberalismo o el anticlericalismo, sino del propio catolicismo. Así, en México es visible la formación de un Nuevo Catolicismo –utilizando la terminología de Christopher Clark– que dio paso a una Iglesia más pobre pero también, paradójicamente, más activa, impulsada por una renovación religiosa que se mostró, entre otros aspectos, en nuevas asociaciones y agrupaciones religiosas y en el uso de nuevos métodos por el dominio social, como la prensa, la educación e incluso la participación política. Se trató de un catolicismo más uniforme, centralizado y cercano a la Santa Sede que buscó resolver los conflictos nacionales y reivindicar la libertad eclesiástica ante el Estado⁵.

En suma, este trabajo ofrece una lectura de las mutaciones del campo religioso mexicano en el largo siglo XIX. Sostengo que los cambios en la relación entre Estado, Iglesia y sociedad en México formaron parte no sólo de un proceso jurídico, sino de una creciente secularización social, que de la mano de la legislación liberal fomentó una radical separación de esferas entre el poder político y religioso, garantizando así el fortalecimiento institucional y la mutua independencia de la Iglesia y el Estado en México. En ese sentido, este trabajo se suma a la aportación de Miranda Lida, quien sostiene que la historiografía mexicana no ha discutido críticamente las categorías de secularización y romanización en las cuales descansa, por lo que no ha analizado aún a profundidad las continuidades del catolicismo⁶. Si bien en estas líneas hay algo del “ciclo de derrota, revancha y victoria” de la Iglesia que advierte Lida, este trabajo busca ofrecer una identificación de los cambios y continuidades de la Iglesia católica y los creyentes mexicanos durante el siglo XIX a partir de una perspectiva centrada en la secularización social.

Del mismo modo, este trabajo busca subrayar la innovación que ofreció el caso de México –como el latinoamericano– frente a las experiencias históricas de países europeos con fuerte raigambre católica. Como ha mostrado Sol Serrano al estudiar el caso chileno, tras las guerras de independencia dos consensos fueron aceptados por el conjunto de los actores políticos y eclesiásticos: el republicano y el católico⁷. Ello permitió que en el México previo a la Reforma liberal el clero, también liberal, aceptara las libertades modernas en la medida en que el Estado fuera católico y reconociera a la Iglesia como sociedad perfecta anterior a la propia nación. En el caso analizado, el consenso confesional perdió vigencia durante la Reforma liberal, pues con la promulgación de las Leyes de Reforma se cimentó la separación entre Iglesia y Estado y se modificó a profundidad el papel de la Iglesia en la sociedad mexicana⁸.

5 CLARK, Christopher – The new Catholicism and the European Culture wars. In Christopher Clark y Wolfram Kaiser (eds.) – *Culture wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Europe*, Cambridge: Cambridge University Press, 2003, p. 11-46.

6 LIDA, Miranda – La Iglesia Católica en las más recientes historiografías de México y Argentina. Religión, modernidad y secularización. *Historia Mexicana*, México, El Colegio de México, volumen LVI, número 4, (abril-junio 2007), p. 1393-1426.

7 SERRANO, Sol – *¿Qué hacer con Dios en la República?...*, p. 67-86.

8 MUJANGOS Y GONZÁLEZ, Pablo – Clemente de Jesús Munguía y el fracaso de los liberalismos católicos en México (1846-1861) y PANI, Erika – Iglesia, Estado y Reforma: las complejidades de una ruptura. In Brian Connaughton (coord.), *México durante la guerra de Reforma*, p. 41-63 y 167-198.

Construido a partir de una revisión historiográfica, el trabajo se divide en tres partes. En la primera me concentro en los primeros años de la independencia, desde la promulgación de la constitución de 1824 hasta el inicio de la Reforma liberal, en 1855. En la segunda analizo este periodo, destacando la promulgación de las Leyes de Reforma, y por último analizo la situación de la Iglesia en el último tercio del siglo XIX y las dos primeras décadas del siglo XX, del gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911) hasta el fin del proyecto renovador católico en 1914, bajo la sombra anticlerical de la revolución mexicana.

Consenso liberal, consenso republicano (1824-1855)

El consenso en torno a la independencia de México se consiguió a través del Plan de Iguala, firmado el 24 de febrero de 1821. En su primer artículo, este acuerdo establecía que la religión del país sería la católica, con exclusión de cualquier otra. Por su parte, el artículo 14 garantizaba al clero y al ejército sus fueros y privilegios, amenazados por el golpe de Estado en España. Gracias a la posición privilegiada que el plan otorgaba a las más importantes corporaciones novohispanas, la opinión pública novohispana se aglutinó en torno a la idea de la independencia, que se consumó el 21 de septiembre de 1821⁹.

Después de la caída del efímero Imperio mexicano, presidido por Agustín de Iturbide (1822-1823), el primer Congreso Constituyente del país promulgó la Constitución política de México en octubre de 1824. Ella estableció la república federal como el régimen de gobierno para la nueva nación. En su artículo tercero, la carta magna establecía que la religión católica era la única en el país, sin tolerancia de ninguna otra¹⁰. La legislación republicana plasmó los dos consensos que se mantendrían vigentes los primeros 34 años de vida independiente en México: el republicano y el católico. Éstos fueron la base de las relaciones entre Iglesia y Estado en México y en buena parte de las repúblicas latinoamericanas, como Chile y Argentina, por citar los casos ya mencionados. Con el trasfondo de una sociedad católica no exenta de crítica anticlerical –como ha mostrado el estudio de ciudades y villas de los obispados de Puebla y Guadalajara–,¹¹ la relación entre la jerarquía eclesiástica y el gobierno nacional no fue tan armónica como parecía imaginar la Constitución de 1824.

9 Cf. STAPLES, Anne – *La Iglesia en la primera república federal mexicana (1824-1835)*, México: Secretaría de Educación Pública, 1976, p. 15. Cf. también el reciente aporte de TECUANHUEY SANDOVAL, Alicia – *La formación del consenso por la independencia. Lógica de la ruptura del Juramento. Puebla, 1810-1821*, Puebla, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 2010, *passim*. Nuevas miradas en torno a la temática en CASAS GARCÍA, Juan Carlos (ed.), *Iglesia, Independencia y Revolución*, México: Universidad Pontificia de México, 2010.

10 *Constitución federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el Congreso Constituyente el 4 de octubre de 1824*, México, Imprenta del Águila a cargo de Bonifacio Conejo, p. 4.

11 Cf., además del ya citado trabajo de TECUANHUEY, Alicia – *La formación del consenso...*; CARBAJAL LÓPEZ, David – *La política eclesiástica del estado de Veracruz 1824-1834*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia, Miguel Ángel Porrúa, 2006 y CONNAUGHTON, Brian – *Dimensiones de la identidad patriótica. Religión, política y regiones en México. Siglo XIX*, México: Universidad Autónoma Metropolitana – Izrtapalapa, Miguel Ángel Porrúa, 2001.

Para la Iglesia, los años de la primera república federal (1824-1835) significaron la disminución de personal en la organización eclesiástica: en 1829 se llegó, incluso, a la ausencia de obispos en el país al fallecer el mitrado de Puebla Antonio Joaquín Pérez Martínez, quien había firmado el acta de independencia. Los principales problemas que enfrentaron clero y gobierno en estos años fueron la discusión en torno al patronato y, en general, la relación de México con la Santa Sede, además de la provisión de las vacantes episcopales en 1831 y la primera reforma liberal, ocurrida entre 1833 y 1834¹². Así, el dilema de la primera mitad del siglo XIX en México no era la separación de esferas, sino la normalización de los vínculos con la Santa Sede y la reconstrucción de una Iglesia afectada por la guerra de Independencia, la ausencia de obispos y el consiguiente “relajamiento” del clero¹³.

En este tenor, la discusión en torno al patronato fue medular en los primeros años de la república federal¹⁴. El problema era delicado, pues España no reconoció la independencia de sus antiguas colonias hasta 1836. Desde 1821, el arzobispo y el Cabildo Catedral de México sostuvieron ante Agustín de Iturbide que el patronato había cesado con la Independencia, pues así como México había quedado en libertad al separarse de España, la Iglesia recobraba la suya al perder la sujeción al Rey Católico. Ante la dificultad de hallar un acuerdo entre gobierno y jerarquía católica, en 1824 el Congreso nacional decidió enviar un representante de México ante la Santa Sede, con el carácter de ministro plenipotenciario, cuya misión era solicitar al Papa que concediera al gobierno mexicano el uso del Patronato, obtener la firma de un concordato que lo regulara y conseguir el nombramiento de una nueva jerarquía para el país, con mitrados mexicanos¹⁵.

El designado fue el canónigo de Puebla Francisco Pablo Vázquez, quien salió a Europa en 1825 y permaneció en Londres, París, Bruselas, Florencia y Roma hasta 1831, cuando obtuvo la preconización de cinco obispos *motu proprio* de Gregorio XVI. Sin embargo, no negoció un concordato y no trajo consigo la concesión del patronato para la nación. Su misión

12 Cf. ALCALÁ ALVARADO, Alfonso – *Una pugna diplomática ante la Santa Sede. El restablecimiento del Episcopado en México, 1825-1831*, México: Porrúa, 1967; MORALES, Francisco – *Clero y política en México (1767-1834). Algunas ideas sobre la autoridad, la independencia y la Reforma eclesiástica*, México: Secretaría de Educación Pública, 1975, p. 99-119; COSTELOE, Michael P. – *Church and State in Independent Mexico: A Study of the Patronage Debate, 1821-1857*, Londres: Royal Historical Society, 1978; DÍAZ PATIÑO, Gabriela – Los debates en torno al Patronato Eclesiástico a comienzos de la época republicana: el caso de Michoacán. *Anuario de Historia de América Latina*, número 43 (2006), p. 397-414.

13 SERRANO, Sol – *¿Qué hacer con Dios en la República?*, p. 81-82.

14 En términos generales, el Patronato consistía en el derecho de la Corona española –obtenido desde el siglo XVI en razón de una concesión pontificia por el descubrimiento de América– a nombrar la jerarquía eclesiástica y controlar el diezmo de las Iglesias americanas. HERA, Alberto de la – *Iglesia y Corona en la América Española*, Madrid: Mapfre, 1992, p. 175, así como COSTELOE, Michael P. – *Church and State in Independent Mexico*, p. 5.

15 Cf. GÓMEZ CIRIZA, Roberto – *México ante la diplomacia vaticana: el periodo triangular 1821-1836*, México: Fondo de Cultura Económica, 1977; GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – *Poder político y religioso en México. Siglo XIX*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Sociales, Cámara de Diputados, Miguel Ángel Porrúa, Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 2010, tomo 1, 2010, p. 50-65. Cf. también CONNAUGHTON, Brian – República federal y patronato: el ascenso y descalabro de un proyecto. *Estudios de historia moderna y contemporánea de México*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, número 39 (enero-junio de 2010), p. 5-70.

se concentró en el aspecto más claramente eclesiástico la preconización de mitrados. Vázquez mismo alcanzó la mitra de Puebla, formando parte así la primera generación de obispos mexicanos, que permanecerá en sus sedes hasta la renovación generacional de mediados de siglo. Este grupo de mitrados se caracterizó por su convicción republicana y la férrea defensa de los derechos y las libertades de la Iglesia, aspecto que resaltó a partir de 1833¹⁶.

Aquel año, la primera generación de liberales mexicanos, liderada ideológicamente por José María Luis Mora, puso en práctica un primer proyecto de reforma liberal de la sociedad. Entre mayo y diciembre de 1833, el vicepresidente Gómez Farías atribuyó unilateralmente al Estado el Patronato nacional, estableciendo una pena de 10 años de destierro a quienes no reconocieran ese derecho. Asimismo, autorizó al gobierno regular la enseñanza pública, clausuró la Real y Pontificia Universidad de México, proveyó las parroquias vacantes y eliminó la coacción civil en el cobro de diezmos¹⁷.

Los obispos, entre quienes destacaron el propio Vázquez y el obispo de Michoacán, Juan Cayetano Gómez de Portugal, rechazaron la intromisión del Estado en asuntos que consideraron meramente eclesiásticos. Así, la jerarquía eclesiástica dejó en claro desde aquel año que la libertad de la Iglesia, que consideraban obtenida con la independencia nacional, era un derecho inalienable que defenderían sin tregua, pues no reconocían al Estado como la autoridad suprema para dictar las condiciones de la relación entre ambos poderes. La intervención del presidente Antonio López de Santa Anna, quien canceló la reforma en 1834, permitió superar este primer enfrentamiento entre Iglesia y Estado que, sin embargo, marcó el derrotero de las relaciones futuras entre gobernantes y mitrados. El único aspecto que permaneció en vigor fue la no coacción civil para el pago de diezmos. Esto produjo una estrepitosa caída en los ingresos eclesiásticos, lo que poco a poco abrió las puertas de la Iglesia a un clero proveniente de estratos medios y pobres, dando así un nuevo perfil de sacerdotes para los años de la Reforma liberal y, particularmente, de la República restaurada y el porfiriato, fenómeno que ocurrió tempranamente en países como Argentina y Uruguay¹⁸.

Amén de lo anterior, la continua exacción fiscal del gobierno nacional, centralista o federalista, a las arcas eclesiásticas –que fueron vistas como una casi inagotable fuente de recursos por un régimen acosado por la bancarrota y las deudas con los agiotistas– fueron una constante fuente de tensiones y enfrentamientos entre Iglesia y Estado. En medio de la guerra con los Estados Unidos (1846-1848), que significó la pérdida de la mitad del territorio nacional para México, el debate en torno a las propiedades eclesiásticas se inició de nuevo, pues el 15 de enero de 1847 Valentín

16 Cf. GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – La jerarquía católica y los gobiernos mexicanos, 1830-1840. In Alicia Tecuanhuey Sandoval (coord.), *Clérigos, políticos y política. Las relaciones Iglesia y Estado en Puebla, siglos XIX y XX*, Puebla: Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 2002, p. 69-83.

17 GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – *Poder político y religioso en México*, tomo I, p. 109-110.

18 DI STÉFANO, Roberto – *El púlpito y la plaza*, p. 62-89.

Gómez Farías, de nuevo vicepresidente del país, decretó un préstamo forzoso de 15 millones de pesos del clero mexicano para solventar la defensa nacional, garantizado con propiedades eclesiásticas. Por segunda ocasión, los obispos Vázquez y Portugal defendieron los bienes de la Iglesia como sujetos a la jurisdicción exclusivamente eclesiástica, enfrentándose a la autoridad civil y consiguiendo que la nacionalización de bienes eclesiásticos fuera trocada por un préstamo mucho menor.

A pesar de estas desavenencias entre Iglesia y Estado en defensa de la supremacía de este o la independencia de aquella, las posiciones encontradas de clero y gobierno fueron acalladas en la búsqueda del consenso religioso en la república, como correspondía a una nación que se consideraba exclusivamente católica¹⁹. Este sentido tenía el continuo interés del gobierno nacional por firmar un concordato con la Santa Sede hasta 1855, como ha mostrado Marta Eugenia García Ugarte²⁰. El mismo objetivo tuvo, particularmente a partir de 1850, el método de designación de obispos. La Santa Sede y los cabildos catedrales permitieron que los gobernadores estatales ejercieran la exclusiva —el rechazo de algún candidato a la mitra, prerrogativa del patrono—, y que la presentación del elegido ante la Santa Sede la hiciera el presidente de la república, algo que sólo podía ser otorgado por la firma de un concordato, objetivo que no pudo alcanzarse.

A nivel social, el consenso católico en la república se expresó a través de la sacralización de la nación. En este periodo, la construcción del patriotismo mexicano estuvo marcado por las metáforas religiosas, creando una frontera muy permeable entre lo religioso y lo cívico. Un elemento central para ello fue la homilética y su derivado secular, el discurso cívico. A través de ellos se forjó la idea de “nación elegida” que marcó al nacionalismo mexicano hasta la Reforma liberal²¹. Este aspecto, empero, no fue privativo de México: lo mismo ocurrió en países como Guatemala y más tarde en Ecuador²². Algo similar sucedió con los rituales públicos, como las procesiones o, incluso, los festejos por la independencia de México, que subrayaban, entre el canto del *Te Deum*, la procesión religiosa, las campanas y el desfile militar, el vínculo que unía a Iglesia y Estado en la república mexicana²³. ¿Qué tanto permeaba este discurso en el seno de la sociedad? Si bien es difícil saberlo, el rechazo abrumador a la propuesta de tolerancia religiosa que

19 La cual había sido restaurada como máxima ley en el país en 1846, tras 12 años de gobiernos centralistas, regidos por las Siete Leyes Constitucionales de 1836 y más tarde por las Bases de Tacubaya de 1842. Ambas leyes, empero, insistieron en la exclusividad de la religión católica y en el Estado católico.

20 GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia — *Poder político y religioso en México*, tomo I, p. 45-446.

21 HERREJÓN PEREDO, Carlos — *Del sermón al discurso cívico. México, 1760-1834*, Zamora, El Colegio de Michoacán, El Colegio de México, 2003; CONNAUGHTON, Brian — *Ideología y sociedad en Guadalajara (1788-1853)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992, y CONNAUGHTON, Brian — *Dimensiones de la identidad patriótica*.

22 SULLIVAN-GONZÁLEZ, Douglass, *Piety, Power and Politics. Religion and nation formation in Guatemala, 1821-1871*, Pittsburgh, University of Pittsburgh Press, 1998, y BURIANO CASTRO, Ana — *Navegando en la borrasca. Construir la nación de la fe en el mundo de la impiedad, Ecuador, 1860-1875*, México, Instituto Mora, 2008.

23 LEMPÉRIÈRE, Annick — *Entre Dieu et le Roi, la République. México, XVIe-XIXe siècle*, París: Les Belles Lettres, 2004, así como CARBAJAL LÓPEZ, David — *Utilité du publique u cause publique. Les corporations religieuses et les changements politiques à Orizaba (Mexique), 1700-1834*. París: tesis de doctorado en historia, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 2010.

se discutió en la Cámara de Diputados en 1848 y 1849 parece mostrar que los grupos sociales participaban de la unidad confesional y el nacionalismo religioso.

En suma, entre 1824 y 1855 actores políticos y eclesiásticos compartieron el consenso republicano y el consenso confesional en torno a la religión católica. Al hacerlo soterraron las diferencias entre ambas potestades y construyeron un nacionalismo religioso que aprovechó el ritual público y los sermones para subrayar los estrechos vínculos entre Iglesia, Estado y sociedad en el México de la primera mitad del siglo XIX. A pesar de esta búsqueda mutua de armonía, las continuas fricciones entre los gobiernos liberales encabezados por Valentín Gómez Farías y los obispos mexicanos nombrados en 1831 mostraron al Estado que la Iglesia defendería su libertad a toda costa y a los mitrados les reveló lo cara que resultaba la cercanía con el Estado. Sin embargo, los objetivos comunes de Iglesia y Estado no hacían aún previsible al iniciar la década de 1850 que unos años después se habría firmado jurídicamente la separación e independencia entre ambas potestades.

La Reforma liberal (1855-1874)

La derrota de México con los Estados Unidos, sellada con el tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, polarizó las posiciones políticas de los letrados mexicanos. Lucas Alamán, hombre público que había tenido una destacada participación política desde 1824, fundó el Partido Conservador. En abril de 1853 se alió con Antonio López de Santa Anna —el hombre fuerte de México entre 1829 y 1855, presidente del país en 6 ocasiones durante este periodo— y fundó un régimen que, presidido por el mismo Santa Anna, pronto se convirtió en una dictadura que tenía como sus pilares al clero y al ejército²⁴. Además de ofrecer a la jerarquía eclesiástica una alta posición social, el régimen santanista cubrió varias sedes vacantes, lo que permitió el primer relevo generacional de los obispos mexicanos desde la restauración de la jerarquía eclesiástica en 1831.

En respuesta a este régimen se dio la revolución de Ayutla (1854-1855), que pasó de una alianza entre las fuerzas opositoras al régimen personalista de Santa Anna al movimiento que llevó al poder a la segunda generación de liberales mexicanos. En diciembre de 1854 el gobierno quedó en manos del moderado Ignacio Comonfort, quien se rodeó de un gabinete de liberales entonces exiliados en Nueva Orleans, como el pragmático Benito Juárez o el radical Melchor Ocampo²⁵. Estos hombres iniciaron la Reforma liberal con la promulgación de una legislación que limitaba los privilegios del clero. En noviembre de 1855 se publicó la Ley Juárez, que eliminaba el fuero eclesiástico en negocios civiles y lo hacía renunciante en asuntos penales. Empero, la norma más radical fue dictada el 25 de junio de 1856. Conocida como Ley Lerdo por el líder “puro” o radical Miguel

24 Una visión política del periodo, en VÁZQUEZ, Josefina Zoraida — *Dos décadas de desilusiones: en busca de una fórmula adecuada de gobierno (1832-1854)*, México: El Colegio de México, Instituto Mora, 2009.

25 HAMNETT, Brian — *Juárez. El benemérito de las Américas*, México, Colofón, 2006, p. 73-74.

Lerdo, la ley de desamortización establecía que los bienes de comunidades eclesiásticas y civiles –como cofradías o pueblos de indios– debían venderse a sus arrendatarios para dinamizar la economía, pues serían improductivas mientras permanecieran “en manos muertas”. Este proceso significó la pérdida de la enorme riqueza económica de la Iglesia, acumulada a lo largo de tres siglos²⁶. Ambas disposiciones tenían sus raíces en el reformismo borbónico, que había buscado desde la década de 1760 limitar los privilegios de la Iglesia en aras del fortalecimiento real, con medidas similares a las de los liberales mexicanos²⁷.

Las protestas de los nuevos obispos mexicanos no se hicieron esperar, dando pie al primer enfrentamiento entre clero y gobierno. El obispo de Puebla y antiguo canónigo de Michoacán, Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, fue expulsado del país el 13 de mayo de 1856, acusado de haber financiado un levantamiento en contra del gobierno de Comonfort que, bajo la dirección de Antonio de Haro y Tamariz, llegó a tomar la ciudad de Puebla en los primeros días de aquel año²⁸. Sin embargo, el mayor enfrentamiento entre ambas potestades llegó con la promulgación de una nueva constitución política, el 5 de febrero de 1857. Durante el Congreso Constituyente, la cuestión religiosa se discutió en torno al proyecto de los artículos 15 y 123 constitucional, que proponía la libertad de cultos al plantear el retiro del poder civil en materia eclesiástica. El proyecto apuntaba que el gobierno nacional no impediría el ejercicio de algún culto religioso, a pesar de proteger a la religión católica por haber sido la exclusiva de la nación²⁹. El artículo no fue aprobado por la oposición de la mayoría moderada, pero mostró que los sectores más radicales del liberalismo insistirían en la libertad de cultos como un aspecto central para modernizar a México. Por su parte, el artículo 123 permitió legislar al Congreso en materia religiosa, y autorizó a los poderes federales a intervenir en materia de culto y disciplina externa. La medida, anclada en la práctica regalista de las primeras décadas de la república, fue definida sólo por el gobierno liberal, sin concordato, uno de los anhelos más caros de las relaciones

26 Los mejores estudios del aspecto económico de la Reforma liberal siguen siendo BAZANT, Jan – *Los bienes de la Iglesia en México (1856-1875). Aspectos económicos y sociales de la revolución liberal*, México: El Colegio de México, 1977 y KNOWLTON, Robert J. – *Church property and the Mexican Reform, 1856-1910*, Dekalb: Northern Illinois University Press, 1976. Un estudio regional sobre la temática, en CERVANTES BELLO, Francisco Javier – *De la impiedad y la usura. Los capitales eclesiásticos y el crédito en Puebla (1825-1863)*, México: tesis de doctorado en historia, El Colegio de México, 1993.

27 Es la tesis de HALE, Charles A. – *El liberalismo mexicano en la época de Mora (1821-1853)*, México, Siglo XXI editores, 1972. Sobre el impacto de las reformas borbónicas en el clero, FARRIS, Nancy M. – *Crown and Clergy in Colonial Mexico 1759-1821. The crisis of Ecclesiastical Privilege*, Londres: Athlone Press, 1968, y BRADING, David A. – *Una Iglesia asediada: el obispado de Michoacán, 1749-1810*, México: Fondo de Cultura Económica, 1994.

28 Cf. GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – *Church and State in Conflict: Bishop Labastida in Puebla, 1855-1856*. In Susan Deans-Smith y Eric Van Young (eds.) – *Mexican Soundings. Essays in honour of David A. Brading*, Londres: Institute for the Study of the Americas, University of London, 2007, p. 140-168, y TECUANHUEY SANDOVAL, Alicia – *La diócesis de Puebla en la época de la Reforma*. In Jaime Olveda (coord.) – *Los obispos de México frente a la Reforma liberal*, México: El Colegio de Jalisco, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, 2007, p. 173-200.

29 Cf. PANI, Erika – *Iglesia, Estado y reforma*, p. 45-52.

Iglesia-Estado en los años previos. El catolicismo empezaba a ser cuestionado como la base de unión de la nación mexicana.

¿Cuál era la posición de la sociedad en este enfrentamiento entre gobierno y jerarquía eclesiástica? Es difícil saberlo en el actual estado de la investigación, pero algunas problemáticas parecen ofrecer algunas pistas. La disposición del gobierno liberal de que los funcionarios públicos juraran la Constitución abrió un amplio debate público que subrayó la influencia eclesiástica entre los burócratas y letrados mexicanos: muchos prefirieron perder el empleo antes que ganarse la excomunión. Lo mismo sugiere el escaso éxito del Registro Civil, que inició sus funciones en 1861. Por último otro botón: a partir del estudio de las prácticas funerarias, Pamela Voekel sostiene que el catolicismo ilustrado permitió que la elite letrada liberal pasara de los fastos públicos barrocos a una piedad interior, que produjo una práctica religiosa individual y discreta³⁰.

Conocemos mejor la posición de la jerarquía eclesiástica en la Reforma liberal. El estudio de los obispos mexicanos ha mostrado que no se trataba de un grupo homogéneo. Como el resto de los actores políticos, el clero buscó la negociación antes que el conflicto ante la polarización ideológica. Pelagio Antonio de Labastida en Puebla es un claro ejemplo, pues utilizó el discurso eclesiástico para evitar la confrontación directa, por lo menos hasta 1857, y a pesar de su giro monarquista hacia 1861 mantuvo siempre un claro pragmatismo político abierto a la negociación con el poder civil³¹. Desde una formación distinta, fueron parte de este mismo ímpetu el arzobispo de México, Lázaro de la Garza y su alumno Pedro Loza, ordinario de Sonora, así como los mitrados formados en Guadalajara, como el obispo de Chiapas y Puebla Carlos María Colina, el de San Luis Potosí Pedro Barajas y el propio arzobispo tapatío, Pedro Espinosa³².

El estudio del obispo Munguía, emprendido por Pablo Mijangos, revela una visión menos dicotómica de la relación Iglesia-Estado en la Reforma liberal, vista tradicionalmente como una disputa entre tradición y modernidad. Dado que el liberalismo mexicano no surgió como un rompimiento con la tradición católica hispánica sino que se nutrió de ella, en México –a diferencia de la experiencia europea– la jerarquía eclesiástica era tan “liberal” como las autoridades civiles³³. Si ello permitió compartir consensos y objetivos a unos y otros hasta 1855, los debates en torno a la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma cerraron esta posibilidad. Siguiendo a Mijangos, el catolicismo liberal y

30 VOEKEL, Pamela – *Alone before God: The Religious Origins of Modernity in Mexico*, Durham, Duke University Press, 2002.

31 Además del trabajo ya citado de GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – *Poder político y religioso en México. Siglo XIX*, 2 tomos, una visión sintética de la vida de Labastida puede verse en GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – Pelagio Antonio Labastida y Dávalos, obispo de Puebla y arzobispo de México. Un acercamiento biográfico. In Gustavo Watson Marrón, Berenise Bravo Rubio et. al – *Guía del archivo episcopal de Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos. 1863-1891*, México: Archivo del Arzobispado de México, 2006, p. 21-80.

32 Cf. los artículos reunidos en OLVEDA, Jaime (coord.) – *Los obispos de México frente a la Reforma liberal...*, *passim*.

33 Las raíces católicas de la constitución gaditana y en general el liberalismo hispánico, y por tanto mexicano, son analizadas a profundidad en PORTILLO VALDÉS, José María, *Revolución de nación. Orígenes de la cultura constitucional en España, 1780-1812*, Madrid: Boletín Oficial del Estado, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000.

republicano en México defendía, a partir de los postulados del propio Munguía, el constitucionalismo —la carta magna de 1824—, la autonomía eclesiástica y la intolerancia religiosa. El enfrentamiento con el poder civil sólo se dio cuando el Estado amenazó la autonomía y la libertad de la Iglesia y abrió la puerta a la libertad de cultos³⁴. En este tenor, el estudio del obispo Munguía ha mostrado que el rechazo de la Iglesia a la Reforma liberal surgió por la propia transformación de la Iglesia mexicana y su redefinición frente a un Estado que aspiraba a conservar el derecho público eclesiástico heredado de la época colonial. Al defender su independencia y autonomía frente al Estado sin renunciar al privilegio de la Iglesia católica de ser la única en el país, la jerarquía católica terminó por enfrentarse a un Estado que buscaba fortalecerse sobre cualquier otra corporación³⁵. El resultado fue la separación jurídica de Iglesia y Estado decretada en 1859, y el acercamiento entre los mitrados mexicanos y Pío IX.

¿Qué llevó, pues, a la tajante separación jurídica de Iglesia y Estado decretada por las Leyes de Reforma en 1859? Como ha mostrado Guy Thomson, este ambicioso programa jurídico —cuyos objetivos eran la eliminación de privilegios corporativos, el fin de las diferencias fiscales y la igualdad legal en aras de un Estado fuerte y de la secularización social— se radicalizó con la guerra civil³⁶. Enfrentado a un régimen conservador que ciertamente recibió apoyo eclesiástico, las leyes de Reforma se dictaron entre julio y agosto de 1859, marcando el principal cambio jurídico de las relaciones entre poder civil y religioso en el México del siglo XIX. Tras culpar al clero de ser el principal instigador de la guerra civil y el desorden legal, Juárez estableció la separación Iglesia-Estado, la libertad de cultos, la nacionalización de los bienes del clero, la supresión de cofradías y órdenes regulares, el matrimonio civil y la creación del Registro Civil³⁷. Se había sellado no sólo el fin de la relación armónica entre Iglesia y Estado que caracterizó al México de principios de siglo, sino que se había dado normatividad jurídica a una nueva relación que marcará la relación entre Iglesia, Estado y sociedad el resto de la centuria. Al mismo tiempo, se había roto el consenso republicano: con una fortaleza

34 MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Pablo — Clemente de Jesús Munguía, *passim*.

35 Cf. MIJANGOS Y GONZÁLEZ, Pablo — The lawyer of the Church: Bishop Clemente de Jesús Munguía and the ecclesiastical response to the Liberal Revolution in Mexico (1810-1868), Austin: tesis de doctorado en historia, University of Texas at Austin, 2009, *passim*. Esta lectura de la Reforma es planteada en GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia — *Poder político y religioso*, tomo I, p. 651-914. Cf. también los artículos reunidos en CONNAUGHTON, Brian (coord.) — *México durante la guerra de Reforma*, *passim*.

36 THOMSON, Guy P. C., with the collaboration of David G. LaFrance — *Patriotism, Politics and Popular Liberalism in Nineteenth-Century Mexico: Juan Francisco Lucas and the Puebla Sierra*, Wilmington: Scholarly Resources, 1999, p. 1-71. Cf. también JACKSON, Robert H. (ed.) — *Liberals, the Church, and Indian Peasants. Corporate lands and the Challenge of Reform in Nineteenth-Century Latin America*, Albuquerque: University of New Mexico Press, 1997.

37 Cf. CONNAUGHTON, Brian — Introducción. In CONNAUGHTON, Brian (coord.) — *México durante la guerra de Reforma*, p. 15-38. Para entonces, el estado de las órdenes religiosas, particularmente las masculinas, era más bien decadente. El estado de relajación y la pérdida de su patrimonio económico las tenía de por sí al borde de la extinción. Cf. el ejemplo que ofrece TORRE CURIÉL, José Refugio de la — *Vicarios en entredicho. Crisis y desestructuración de la provincia franciscana de Santiago de Xalisco, 1749-1860*, Zamora: El Colegio de Michoacán, Universidad de Guadalajara, 2001.

inusitada, una buena parte de los conservadores lucharían desde entonces en Europa por erigir una monarquía en México.

Tras su victoria en la guerra civil, una de las primeras medidas del gobierno liberal fue la expulsión de varios obispos mexicanos, quienes llegaron a Roma a acompañar en el destierro al obispo de Puebla. La inédita cercanía de buena parte de la jerarquía eclesiástica con el papa Pío IX señaló un nuevo rumbo a la Iglesia mexicana. Como nunca antes, se recurrió a la Santa Sede para defender la libertad de la Iglesia frente al Estado mexicano. Al mismo tiempo que se creaban nuevas diócesis para la mejor atención pastoral y los obispados de Guadalajara y Michoacán se convertían en arzobispados, se nombró prelado de la sede primada de México a Labastida y Dávalos.

La jerarquía eclesiástica apoyó la llegada de un monarca extranjero en México, interesada en un régimen que suprimiera las leyes de Reforma y restableciera los derechos que la Iglesia asumía como propios. Vale la pena subrayar que la heterogeneidad de los actores eclesiásticos se hizo presente con el apoyo que el Cabildo eclesiástico de Guadalajara dio al gobierno liberal de Juárez³⁸. A pesar de esta muestra disímola, la postura más destacada del periodo fue la del arzobispo Labastida, quien apoyó de lleno el proyecto monárquico. En esta lógica, la Intervención francesa en México (1861-1864) desembocó en el II Imperio, dirigido por el Emperador Maximiliano de Habsburgo, archiduque de Austria (1864-1867). Siguiendo los objetivos imperiales de Napoleón III y sus propias convicciones, Maximiliano encabezó un gobierno liberal. Entre otras medidas, reconoció la venta de bienes eclesiásticos realizados desde 1856, se pronunció a favor de la libertad de cultos con protección del catolicismo y buscó hacer de los eclesiásticos miembros del Estado, sujetos a él a cambio de su congrua sustentación. De hecho, la sujeción de la Iglesia al Estado parece ser un consenso de los actores políticos mexicanos de la época³⁹. Esto llevó al desencanto de la jerarquía eclesiástica con el Imperio. En defensa de las prerrogativas y la posición social de la Iglesia, Labastida había incluso renunciado a la Regencia que gobernaba al país en espera del Emperador desde 1863; Clemente de Jesús Munguía sostuvo ante Pío IX al volver a Roma en 1865 que era mejor la república y la libertad de la Iglesia que el imperio y su sujeción. La pérdida de apoyos por parte del clero impidió a Maximiliano llegar a un Concordato con la Santa Sede —que buscó sin éxito en 1866— y, al final, precipitó la caída de su gobierno en 1867.

La República liberal se fortaleció después de junio de este último año, cuando el Emperador fue fusilado por órdenes del presidente Benito Juárez. Desde entonces, el

38 Desde 1856, el obispo Pedro Espinosa había permitido en un primer momento la desamortización de bienes eclesiásticos bajo la Ley Lerdo. Cf. HERNÁNDEZ PALOMO, José Jesús — Pedro Espinosa y Dávalos: primer arzobispo y su *relatio ad limina* de la Archidiócesis de Guadalajara (1864). In *Archivos de la Iglesia de Sevilla. Homenaje al archivero D. Pedro Rubio Merino*, Córdoba: CajaSur, 2006, p. 1-36.

39 Cf. PANI, Erika — *Para mexicanizar el Segundo Imperio. El imaginario político de los imperialistas*, México: El Colegio de México, Instituto Mora, 2001, así como las obras citadas anteriormente.

liberalismo se convirtió en un mito fundador de la nación. Con base en la Constitución de 1857 y las Leyes de Reforma, el régimen liberal hizo de la separación entre Iglesia y Estado uno de los axiomas de la constitución social del país⁴⁰. Por el camino de la separación y el enfrentamiento, el poder civil y el religioso desembocaron en un nuevo consenso republicano que descansaba ya no en la unanimidad confesional, sino en la separación de esferas y en la pluralidad religiosa como instrumentos para el fortalecimiento del Estado y la secularización social.

En suma, la Reforma liberal en México (1855-1867) significó, en primera instancia, una desconfesionalización del Estado y la conquista de la independencia eclesiástica, un ideal de la jerarquía católica desde 1821. En el fragor de la guerra civil, el liberalismo secular radicalizó su anticlericalismo y con las Leyes de Reforma de 1859 decretó la separación legal entre Iglesia y Estado, la nacionalización de los bienes eclesiásticos y la libertad de cultos. Pero los cambios que trajo consigo este periodo del siglo XIX mexicano fueron mucho más allá de un proceso meramente jurídico. Significaron el fin del consenso católico entre los actores políticos de México, y abrieron paso, entre otros procesos, a la llegada del protestantismo y a la forja de un “espíritu de cruzada” entre los católicos mexicanos. Se había cancelado, asimismo, la viabilidad de los liberalismos católicos en el país. La lógica de la relación entre Iglesia, Estado y sociedad había cambiado. Paradójicamente, se había llegado de nueva cuenta a un consenso republicano que, al permitir la independencia de Iglesia y Estado, dio amplios espacios a uno y otro para luchar por el control social. En los años siguientes puede hablarse ya del afianzamiento de la secularización social en México. Sólo el nuevo embate anticlerical que trajo consigo la revolución mexicana cancelaría la viabilidad del proyecto que durante el régimen de Porfirio Díaz (1876-1911) habían construido los católicos a pesar de la legislación anticlerical forjada en estos años de guerra civil y polarización ideológica.

El catolicismo en la sociedad liberal (1874-1914)

Según la tesis clásica de Jorge Adame Goddard, después de 1867 los católicos mexicanos, asumidos como “los vencidos” en la política nacional, se retiraron de la vida pública y consagraron su vida a labores académicas y literarias⁴¹. Al verlos excluidos de la lucha por el poder político, la historiografía mexicana avocada a este periodo ha incidido con mayor profundidad en las divisiones internas del catolicismo mexicano y su relación con la sociedad. Entre 1867 y 1891, los católicos se refugiaron en las letras ante su innegociable rechazo al régimen liberal, pero ello no significó un retiro absoluto

40 Cf. HALE, Charles A. – *La transformación del liberalismo en México a fines del siglo XIX*, México: Fondo de Cultura Económica, 2002, p. 15-49.

41 Cf. ADAME GODDARD, Jorge – *El pensamiento político y social de los católicos mexicanos, 1867-1914*, México: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, 1991.

de la vida pública por parte de los creyentes. Aprovechando el clima de tolerancia que desarrolló el último gobierno de Benito Juárez (1867-1872), laicos y eclesiásticos se enfocaron en actividades educativas y de beneficencia a nivel parroquial, sin renunciar por ello a la autonomía conquistada durante la Reforma⁴².

En este sentido, la relación de la Iglesia católica con la sociedad se planteó en términos independientes del Estado (liberal). Un primer elemento distintivo del periodo fue la expansión del campo religioso mexicano a partir de 1867 con la incipiente introducción del protestantismo. Como ha señalado Jean Meyer, los presidentes Benito Juárez, Sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz (1867-1911) manifestaron una clara simpatía por la introducción del culto, que llegó a través de misioneros estadounidenses. El protestantismo fue un “aliado útil” del liberalismo para romper –con modestos resultados– la homogeneidad religiosa del país. Gracias a este apoyo, en 1892 se contabilizaban 469 congregaciones en México, que reunían a poco más de 65,000 comulgantes y adherentes⁴³. Los grupos protestantes trabajaron no sólo promoviendo su fe, sino alfabetizando a los obreros de las recientes zonas industriales del centro del país, e impulsando la toma de conciencia social de los costos sociales del régimen. Al mismo tiempo, como dejaban ver las páginas del periódico metodista *El Abogado Cristiano Ilustrado*, fomentaron el amor a la patria como una reafirmación de su identidad mexicana ante las críticas que los tildaban de extranjerizantes. Ello no sólo rompió la unidad religiosa, sino que fomentó un espíritu de cruzada entre los católicos, que vieron la presencia protestante como una amenaza a la tradicional identidad religiosa del país. En la pastoral de José Antonio de la Peña y Navarro, por ejemplo, obispo de la nueva diócesis de Zamora, el protestantismo quedó ligado al liberalismo y a la Cuestión Romana como el gran trinomio con el cual el mundo contemporáneo amenazaba la existencia misma de la Iglesia católica –sin posibilidades de éxito, por supuesto⁴⁴.

Así, el protestantismo motivó en los católicos un mejor conocimiento de su fe y una renovación de su labor social. Este proceso se aparejó con una reforma eclesiástica. En la Carta e Instrucción Pastoral colectiva de 1875, los arzobispos de México, Guadalajara y Michoacán plantearon una reforma que tenía como objetivo fortalecer a la comunidad católica en su interior, a través del fortalecimiento del laicado. Se insistió en la fundación de escuelas, la mayor práctica de la devoción, el celo sacerdotal y la participación de mujeres seglares en actividades de beneficencia⁴⁵. Estos proyectos

42 GARCÍA UGARTE, Marta Eugenia – *Poder político y religioso en México*, tomo II, p. 1296-1415. Cf. también O'DOHERTY, Laura – La Iglesia católica frente al liberalismo. In Erika Pani (coord.) – *Conservadurismo y derechas*, tomo I, p. 363 -393.

43 MEYER, Jean – *Historia de los cristianos en América Latina. Siglos XIX y XX*, México, Jus, 1999, p. 120-125. Sobre el protestantismo en México durante este periodo cf. BASTIAN, Jean-Pierre (coord.) – *Los disidentes: sociedades protestantes y revolución en México, 1872-1911*, México: Fondo de Cultura Económica, El Colegio de México, 1989.

44 Cf., por ejemplo, PEÑA Y NAVARRO, José Antonio de la – *Sexta pastoral del obispo de Zamora, que con objeto de combatir algunos errores del protestantismo dirige a su Ilustrísimo Cabildo, Venerable Clero y demás fieles de su diócesis*, Guadalajara: Tipografía de Isaac Banda, 1872.

45 OLIMÓN NOLASCO, Manuel – *Proyecto de reforma de la Iglesia en México (1867 y 1875)*. In Álvaro Matute, Evelia Trejo y Brian Connaughton (coords.) – *Estado, Iglesia y Sociedad en México. Siglo XIX*, México: Miguel Ángel Porrúa, Universidad Nacional

dieron un temprano resultado en diócesis como Guadalajara y Yucatán, en los cuales la renovada y creciente presencia de los católicos en la sociedad, iniciada en las década de 1880 y 1890 respectivamente, fue eficaz para que los católicos adquirieran una notoria presencia social. Mientras en el primer caso la reconstrucción eclesiástica se cimentó en una sólida organización eclesial y la abundancia de recursos económicos para fundar escuelas, hospitales, asociaciones piadosas y publicaciones, en el segundo se dio una alianza entre Iglesia y Estado para modernizar la infraestructura y los servicios del estado, que se sostenía en la pertenencia de las elites letradas a la Iglesia católica⁴⁶.

Así, a través de instrumentos también utilizados por las elites letradas liberales –que en México habían vivido un tránsito del liberalismo al positivismo como ideología oficial y su ideal de orden y progreso, norte del gobierno de Porfirio Díaz (1876-1911)–, los católicos pugnaron por el control social. El caso de Trinidad Sánchez Santos (1849-1912), periodista y publicista confesional poblano, revela que los letrados católicos denunciaron los costos sociales del régimen político y defendieron a la Iglesia católica como la mejor guía para el orden moral de la sociedad. En otro ejemplo, frente a la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barreda en la ciudad de México en 1867, los católicos respondieron con la fundación o renovación de Universidades Católicas abiertas al conjunto de la juventud entre 1890 y 1907⁴⁷. A través de estos mecanismos pugnaron por una modernización distinta de la sociedad mexicana, que en lugar del ideal laico que se planteaba en ideólogos como Gabino Barreda y Justo Sierra ofrecía también un camino también de paz, orden y progreso, pero bajo la dirección de la Iglesia católica. El estudio de este proyecto sigue siendo un aspecto poco atendido en la historiografía mexicana.

La renovación de la presencia católica en el país hubiera sido imposible sin la confluencia de dos factores simultáneos: la política de conciliación del régimen y la renovación de la Iglesia a partir del pontificado de León XIII (1878-1903). A pesar de la ola de protestas a todo lo largo y ancho del país, en 1874 las leyes de Reforma fueron elevadas a rango constitucional por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada. En 1876 llegó al poder el presidente Porfirio Díaz, antiguo militar liberal que había contribuido al triunfo de la República en 1867 y que, desde 1872, había sido opositor a los regímenes de Juárez y Lerdo de Tejada, acusándolos de haber traicionado la constitución. En aras de alcanzar una gobernabilidad mayor y afianzarse en el poder –en el que permaneció hasta 1910 con un breve intervalo fuera de la silla presidencial entre 1880 y 1884–, Díaz permitió la práctica pública del catolicismo y la acción social de los creyentes, a pesar de estar prohibidas en

Autónoma de México, 1995, p. 267-292.

46 O'DOHERTY, Laura – La política de conciliación en la Arquidiócesis de Guadalajara. In Patricia Galeana (comp.) – *Relaciones Estado – Iglesia: encuentros y desencuentros*, México: Archivo General de la Nación, 1999, p. 138-151 y SAVARINO, Franco – Religión y sociedad en Yucatán durante el porfiriato (1891-1911). *Historia Mexicana*, volumen XLVI, número 3 (enero-marzo de 1997), p. 617-651.

47 Sobre el positivismo en México, además de la obra de Hale ya citada, cf. ZEA, Leopoldo – *El positivismo en México: nacimiento, apogeo y decadencia*, México, Fondo de Cultura Económica, 2005, y QUIRARTE, Martín – *Gabino Barreda, Justo Sierra y el Ateneo de la Juventud*, México: Universidad Nacional Autónoma de México, Dirección General de Publicaciones, 1995.

la constitución. Esta política, conocida como de conciliación, permitió el florecimiento de la labor católica en México hasta la revolución mexicana. Sin embargo, la legislación anticlerical permaneció como un elemento de control del Estado sobre la Iglesia.

Por otra parte, la creciente presencia católica respondió a las pautas del magisterio de León XIII. Durante su pontificado se afianzó en México la romanización del clero, un proyecto de la Santa Sede para centralizar en torno a ella a las Iglesias nacionales y fortalecer la autoridad pontificia frente al clero local. Con el objetivo de cimentar una Iglesia fuerte después de la separación del Estado, se desarrolló en torno a la reforma del clero y las instituciones eclesiásticas, el establecimiento de un nuevo tipo de relaciones con el poder civil –que coadyuvaban sin duda a la política de conciliación porfiriana– y a un mayor contacto con la feligresía. El pivote de la romanización del clero mexicano fue la fundación del Colegio Pío Latinoamericano, en 1858, en el cual se formó la jerarquía que tomó el control de las diócesis mexicanas a partir de 1890. El proceso se formalizó con la normativa emanada del Concilio Plenario Latinoamericano, celebrado en Roma en 1899. A través de esta legislación se buscaba, desde la Iglesia misma, que los católicos pudieran recuperar espacios políticos y sociales que el embate del liberalismo les había arrebatado⁴⁸.

Desde esta lógica puede entenderse mejor la gama de proyectos que los católicos sociales desarrollaron en México a partir de la publicación de *Rerum Novarum* en 1891. Manuel Ceballos Ramírez rastreó el fortalecimiento de una opción social en el catolicismo mexicano, que como ocurría con los protestantes, reaccionó a los costos sociales del régimen y ofreció una respuesta desde la fe. Así, entre 1895 y 1909, el catolicismo social planteó una reforma moral y un mejor reparto de la riqueza a través de la prensa católica –el principal periódico católico de principios del siglo XX, *El País*, dirigido por Sánchez Santos, apareció en 1903–, la fundación de organizaciones sociales y laborales católicas y, particularmente, a través de la celebración de Congresos Católicos entre 1903 y 1909. Además de servir para unificar políticas sociales, estos encuentros periódicos de clero y seglares exigían una sociedad más justa a partir de medidas de atención social. La tesis central de esta postura intraeclesial era que sólo el catolicismo podía solucionar la cuestión social, pues antes que un problema político o económico, era moral⁴⁹.

La crisis política del régimen de Díaz dio paso a la apuesta más arriesgada de esta renovación católica: la participación política. Impulsados por la exigencia de un cambio en la legislación anticlerical fruto de la Reforma liberal, incursionaron en la política grupos de

48 BAUTISTA GARCÍA, Cecilia Adriana – Hacia la romanización de la Iglesia mexicana a fines del siglo XIX. *Historia Mexicana*, México, volumen 55, número 1 (julio-septiembre de 2005), p. 99-144. Cf. también O'DOHERTY, Laura – El ascenso de una jerarquía eclesial intransigente, 1890-1914. In Manuel Ramos Medina (comp.) – *Memoria del I Coloquio Historia de la Iglesia en el siglo XIX*, México: El Colegio de México, El Colegio de Michoacán, Instituto Mora, UAM – I, Condumex, 1998, p. 179-197.

49 Cf. CEBALLOS RAMÍREZ, Manuel – *El catolicismo social: un tercero en discordia*. *Rerum Novarum, la "cuestión social" y la movilización de los católicos mexicanos (1891-1911)*, México, El Colegio de México, 1991. Una lectura complementaria, en ROMERO DE SOLÍS, José Miguel – *El Aguijón del espíritu. Historia contemporánea de la Iglesia en México (1892-1992)*, México: Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, El Colegio de Michoacán, Universidad de Colima, 2006, p. 15-161.

creyentes laicos que habían aprendido a organizarse en asociaciones confesionales como los Círculos Católicos y los Operarios Guadalupanos. Su principal reivindicación era la igualdad jurídica de los católicos a partir de su condición de ciudadanos. Con base en estas propuestas se fundó el Partido Católico Nacional el año de la caída de Díaz, en 1911.

A partir del caso de Jalisco, Laura O'Dogherty ha concluido que el PCN fue parte de una lógica global de restauración católica, que mostró la organización de los laicos y su estrecho contacto con el clero, y que tuvo como objetivo último no sólo la reconquista del control social por parte de los creyentes, sino su reafirmación como ciudadanos en el seno de una república liberal con una legislación marcadamente anticlerical. Combinando un espíritu de cruzada con el magisterio leonino y la crisis del porfiriato, el PCN ofreció una solución cristiana a los problemas sociales desde la arena política. Así, sus miembros defendieron las instituciones democráticas y republicanas⁵⁰. En suma, el PCN fue una experiencia democrática y de reforma política en un medio revolucionario asechado por la violencia social. Fue, también, una experiencia política en la que los católicos buscaron conquistar el espacio político que se les había negado desde 1859. Como los católicos sociales, los creyentes que participaron en esta inédita experiencia política en el México de principios de siglo XX ofrecieron una solución desde la fe a los problemas que la desigualdad social, la falta de espacios políticos y la crisis del régimen planteaban en vísperas de la revolución mexicana.

El PCN tuvo un abrupto final en 1914. El presidente Venustiano Carranza, antiguo gobernador de Coahuila y jefe del Ejército Constitucionalista, acusó a los católicos de haber apoyado el régimen de Victoriano Huerta, quien había derrocado al presidente Francisco I. Madero. Por ello decretó, como en tiempos de la Reforma liberal, la incautación de los bienes del clero y la aplicación de la Constitución política en materia religiosa. Ello significó la renovada puesta en vigor de las Leyes de Reforma, que no habían podido cambiar los miembros del PCN⁵¹. Así, el embate anticlerical emprendido por Carranza en 1914 significó para los católicos la pérdida de derechos políticos –conseguidos tan sólo en la práctica–, el cierre de conventos, la pérdida de propiedades y, sobre todo, el fin de un proyecto renovador que, aprovechando la política de conciliación del régimen de Díaz e impulsada por el propio magisterio pontificio, había permitido a los católicos disputar al Estado liberal el control social y el espacio público. La Constitución política de 1917, promulgada bajo la presidencia de Carranza, garantizó al gobierno el monopolio educativo, prohibió las asociaciones religiosas y negó los derechos políticos a católicos. En suma, reforzó la legislación anticlerical que tenía sus antecedentes en la polarización ideológica de los años de la Reforma liberal.

50 O'DOGHERTY, Laura – *De urnas y sotanas. El Partido Católico Nacional en Jalisco*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Universidad Nacional Autónoma de México, 2001.

51 PADILLA RANGEL, Yolanda – *Los desterrados: exiliados católicos de la Revolución Mexicana en Texas*, Aguascalientes: Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2009.

Consideraciones finales

La relación entre Iglesia, Estado y sociedad entre 1824 y 1914 en México pasó de la unidad confesional a la libertad de cultos, llegando a partir de la Reforma liberal a la separación e independencia entre Iglesia y Estado. En el trasfondo de este cambio está la creciente secularización social, visible en la multiplicación de actores y problemáticas sociales, en la separación –inicialmente jurídica– de las esferas políticas y religiosas y en el perfil de la sociedad civil como una arena en la que Iglesia y Estado disputaron el control social y el espacio público a través de elementos cada vez más parecidos, como la educación, la prensa e incluso la organización política. En suma, entre 1824 y 1914 el campo religioso de México pasó de la unanimidad a la pluralidad, y del consenso al debate. En este proceso pueden ubicarse tres periodos bien diferenciados: el de la búsqueda de acuerdos (1824-1855), el de la separación y el enfrentamiento (1855-1867) y el de la disputa por el espacio público (1867-1914).

Más que una lógica de enfrentamiento dicotómico entre Iglesia (tradición) y Estado (modernidad), las mutaciones del campo religioso de México y la relación de ambas esferas con la sociedad mexicana muestran que los actores eclesiásticos plantearon soluciones “modernas” tanto como los actores políticos etiquetados usualmente como liberales. La lógica de la secularización social—que ha sido el hilo conductor de este trabajo— muestra a la Iglesia y al Estado en construcción, pugnando por su independencia frente al otro y por una mayor presencia en una sociedad civil que se construyó durante el siglo XIX al ritmo de este proceso. A la par que se creaba un Estado nacional secular y aconfesional se creaba una nueva Iglesia, basada en la renovación ya caracterizada por Christopher Clark como Nuevo Catolicismo. Al hacerlo, ambas esferas incorporaron nuevas soluciones y propuestas a las problemáticas inéditas que enfrentaron a lo largo de 90 años.

En suma, la relación entre Iglesia, Estado y sociedad en México entre 1824 y 1914 está marcada no sólo por la legislación liberal, sino por un lento proceso de secularización social que acompañó la separación legal entre Iglesia (romanizada) y Estado (anticlerical). Al hacerlo, dio paso a una sociedad civil integrada por individuos que, asumiéndose la mayoría de las ocasiones como ciudadanos y como creyentes de una joven nación, fortalecieron por igual a una Iglesia y a un Estado independientes en una república que, nacida católica, llegó pronto al Estado laico. La imposibilidad de cambiar el marco jurídico anticlerical en el Porfiriato condenó a los católicos a perder el terreno que habían conquistado en la sociedad civil durante el último tercio del siglo XIX. Excluida de nuevo de la participación política y alejada del espacio público con la Revolución mexicana, los años más duros para la Iglesia católica y los creyentes estaban por venir.